

Límites de la convivencia geográfica entre Chile y Argentina

Reporte No. 85
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Abril 2024

“Desde la Conquista, los gobernadores de Chile ejercieron jurisdicción allende la Cordillera de los Andes. La creación del Virreinato del Río de la Plata en el siglo XVIII, incorporó a Cuyo a la nueva jurisdicción, pero se dejó los territorios australes a la autoridad de la Capitanía General de Chile. A pesar de lo anterior, la definición de límites con Argentina se complicó en 1847 cuando Juan Manuel Rosas protestó por la ocupación chilena del Estrecho de Magallanes, lo que dio origen a complicadas negociaciones diplomáticas que se prolongaron por más de treinta años. Con el inicio de la Guerra del Pacífico, las presiones argentinas se hicieron cada vez más intensas y amenazantes (...) Una vez desatado el conflicto y en medio de la guerra, el 28 de julio de 1881, Chile se vio obligado a llegar a un acuerdo con Argentina y firmar un tratado de límites. Este fijó de manera general las condiciones geográficas de la futura demarcación fronteriza, estableciendo que ésta sería la línea que divide las aguas de las dos cuencas de la Cordillera de los Andes o *divortium aquarum* hasta el paralelo 52º. Más al sur se recurrió a líneas imaginarias y a accidentes topográficos, lo cual aseguró la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes, uno de los intereses estratégicos de la delegación chilena. No obstante, este tratado significó renunciar a los derechos históricos que Chile poseía sobre la Patagonia oriental. Después del tratado siguieron algunos conflictos a partir de la interpretación del *divortium aquarum* y de otros fenómenos geográficos hasta el siglo XX.”

Así comienza la historia según lo relatan en su investigación: “El espacio fronterizo argentino-chileno. Definición de categorías operativas y primera aproximación descriptiva”, los historiadores Alejandro Benedetti e Iñigo Laguado; quienes agregan: “El límite argentino-chileno se trazó sobre una cordillera, sucesión de montañas entre las cuales existen valles y desfiladeros, por donde se puede circular con diferentes grados de dificultad. En el intento por controlar la accesibilidad al espacio cordillerano, ambos países fueron organizando la red de caminos y facilitando más o menos el cruce por alguno de esos sitios. Con el tiempo se fueron institucionalizando los pasos fronterizos. Según lo acordado en las Declaraciones Conjuntas Presidenciales de 1990 y 1991, y en la VIII Reunión de la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física celebrada en Santiago en julio de 1992, se encomendó al Grupo Técnico Mixto la elaboración de un Plan Maestro General de Pasos Fronterizos. El resultado fue la identificación y caracterización de treinta y seis pasos fronterizos de consenso entre la Argentina y Chile, que luego siguió ampliándose. De ese conjunto se estableció una nómina de doce pasos priorizados, los cuales recibirían mayor inversión para obras de infraestructura que son, de norte a sur: Jama, Sico, San Francisco, Agua Negra, Cristo Redentor, Pehuenche, Pino Hachado, Cardenal Samoré, Coihaique, Huemules, Integración Austral y San Sebastián (CFI, 1992 y DNV, 1997). Más tarde se sumó Pircas Negras y actualmente concentra interés el de Las Leñas (Ministerio Planificación, 2011)”

Particularidades del espacio fronterizo argentino-chileno

Este espacio fronterizo se organiza a partir de uno de los límites más extensos del mundo, ocupando el extremo austral del continente —lo que incitó la proyección hacia la Antártida— y extendiéndose por completo a lo largo de la Cordillera de Los Andes. Otra particularidad es que, hasta inicios del siglo XX, el cruce de este espacio de más de 5.000 km de longitud solo era posible por una ruta internacional pavimentada que unía a Buenos Aires con Santiago a través de Mendoza.

Excepto dos —Arica y Parinacota, y Tarapacá—, todas las regiones chilenas son linderas con la Argentina; del otro lado, once provincias argentinas son linderas con Chile. Desde la década de 2000, en una tendencia común a toda Sudamérica, este espacio es cruzado, cada vez más, por máquinas que pavimentan caminos y aceleran la circulación transcordillerana.

El sistema de caminos de este espacio está estructurado por dos conjuntos trazados con sentido predominante norte-sur, a cada lado de la cordillera y a cierta distancia del límite internacional. Usando como analogía la escalera de pintor, esos caminos forman los largueros externos, siendo el límite internacional un larguero intermedio. Transversales, haciendo las veces de peldaños, se suceden treinta y nueve conjuntos de caminos y tres vías fluviales, con sentido predominante oeste-este.

1981

El Tratado de Límites de 1881 entre Chile y Argentina sentó las bases de casi la totalidad de sus actuales 5.600 km de frontera y en él se estableció lo siguiente

- Al norte del Estrecho de Magallanes, la frontera seguiría una línea desde Punta Dúngenes hacia el oeste a lo largo de la cordillera de los Andes hasta Monte Aymond, y luego hacia el oeste a lo largo del paralelo 52.
- En Tierra del Fuego, la frontera discurriría desde el cabo Espíritu Santo, en el paralelo 52°40' sur, a lo largo del meridiano 68°34' oeste hasta el canal de Beagle. La parte occidental de Tierra del Fuego se asignó a Chile y la oriental a Argentina.
- El Estrecho de Magallanes debía quedar permanentemente neutralizado y abierto a la navegación de todas las naciones.
- El tratado no especificaba los límites marítimos más allá del mar territorial de 3 millas náuticas, que era la norma entonces. Esto dio lugar a posteriores disputas sobre el alcance de la jurisdicción marítima de cada país.
- Argentina alegó que el tratado establecía una división "Atlántico-Pacífico", con Argentina como país del Atlántico y Chile como país del Pacífico. Sin embargo, Chile rechazó esta interpretación, que fue confirmada por un fallo del Tribunal de Arbitraje.

Este tratado de delimitó las fronteras terrestres entre Chile y Argentina, incluida Tierra del Fuego, pero dejó ambiguos los límites marítimos, lo que dio lugar a disputas posteriores como el conflicto del Beagle sobre las islas y la jurisdicción marítima en esa región.

La historia continua en 1984

El conflicto del Canal de Beagle se originó por las ambigüedades del tratado fronterizo de 1881 entre ambos países. Las cuestiones clave eran la ubicación exacta del Canal de Beagle y la propiedad de las islas Picton, Lennox y Nueva al sur del canal. 1971, Argentina y Chile acordaron someter la disputa al arbitraje del gobierno británico. En 1977, el tribunal de arbitraje falló a favor de Chile, adjudicándole las islas en disputa. Sin embargo, Argentina rechazó el laudo arbitral por motivos técnicos y ambos países se prepararon para un posible conflicto militar resuelto tras la mediación del Vaticano,

Ello concluyó con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 donde se otorgaba las islas a Chile, pero se le prohibía reclamar la soberanía o una zona económica exclusiva en el Atlántico Sur.

Los principales cambios introducidos en el Tratado de 1984 entre Chile y Argentina, en comparación con el Tratado de 1881, son:

El Tratado de 1984 reconoció la soberanía de Chile sobre las islas del canal de Beagle, resolviendo así un conflicto que había estado pendiente desde el Tratado de 1881.

Mientras que el Tratado de 1881 ya había establecido que el Estrecho de Magallanes pertenecía exclusivamente a Chile, el Tratado de 1984 reafirmó esta soberanía chilena sobre el Estrecho. El Tratado de 1984 definió con mayor precisión la frontera marítima entre Chile y Argentina, a diferencia del Tratado de 1881 que se había enfocado principalmente en la frontera terrestre.

Así mismo tras la firma de este tratado se estableció la realización periódica de consultas, la primera de ellas en abril de 1987, en el llamado Comité de Frontera para el sistema del Cristo Redentor. Allí se estableció la creación de una comisión binacional argentino-chilena de cooperación económica e integración física con la meta de normalizar las relaciones entre ambos países.

El 19 de marzo de 2024, se llevó a cabo en Buenos Aires el II Encuentro de la Comisión Binacional de Seguimiento de los Compromisos Asumidos en Materia de Facilitación Fronteriza e Infraestructura de Pasos entre Chile y Argentina. El acta de dicha reunión se encuentra en el link adjunto al final y recomiendo su lectura.

Plataforma continental

La plataforma continental es la continuación de los continentes al sumergirse bajo el mar. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a todos los Estados que tienen costa, una plataforma continental de 200 millas náuticas (mn). Este espacio se conoce como plataforma continental "jurídica", y es un derecho inherente de los Estados ribereños que existe ipso facto. En casos en que la prolongación natural del continente bajo el mar, desde el punto de vista geomorfológico, se extienda más allá de estas 200 mn, los Estados también pueden exigir su derecho a una plataforma continental "extendida".

Dado el interés estratégico que representan estos espacios, desde hace más de una década, Chile se encontraba estudiando e identificando sus plataformas continentales, lo que concluyó en la presentación -en 2024- de los estudios científicos e informes técnicos sobre la plataforma continental extendida al oeste de la península Antártica y la referida a la provincia de Isla de Pascua.

Otros datos específicos

Chile amplió unilateralmente su plataforma continental en 30,500 km² al oeste de la Península Antártica, lo que se superpone con una plataforma de 5,500 km² reconocida por la ONU como parte de la plataforma continental argentina en 2017. Argentina, por su parte, afirma que la ampliación chilena se superpone con su plataforma continental y que el resto de la zona reclamada por Chile pertenece al patrimonio común de la humanidad.

Chile sostiene que la zona le pertenece "de pleno derecho" y que no hubo objeción de Argentina cuando Chile presentó su reclamo ante la ONU. Ambos países basan sus posiciones en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero interpretan estos documentos de manera diferente.

En el 2009 Argentina presentó ante la CLPC un informe con los trazados de su plataforma continental extendida: una medialuna que incluye un área al sureste del Punto F, que es el punto final de la delimitación marítima entre Chile y Argentina que establece el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En ese momento, Chile protestó ante Argentina, señalando que dicha reclamación era inoponible, es decir, que su pretensión no puede afectar los derechos de Chile en esa zona. Luego, en el año 2016,

la Comisión de Límites se pronunció respecto de la pretensión de Argentina, formulándole recomendaciones.

En la ocasión, Chile insistió en su planteamiento. En 2019 el tema se reactivó. En diciembre de ese año, en su discurso a la nación, el ex Presidente Alberto Fernández sostuvo que: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen, porque pertenecen a todos los argentinos". A principios de 2020, se presentaron en ese país distintos proyectos de ley referentes a la plataforma continental; y, en agosto de ese año, el Congreso argentino aprobó la Ley 27.557 sobre Espacio Marítimo, que fija los límites de la plataforma continental extendida de ese país. Ante esa acción, Chile volvió a enviar notas diplomáticas al país trasandino recordando que era una acción inoponible y señalando que hacía reserva de sus derechos. Justo un año después de ese hecho, es Chile quien actualiza su Carta Náutica, explicitando los límites de su plataforma continental en el mar Austral y los derechos del país en esa zona.

La controversia, se arrastra hasta estos días.

Nota al margen/La polémica del embajador

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, protagonizó una polémica el viernes 15 de marzo durante una visita al paso fronterizo del Cristo Redentor en la que, según indicaron autoridades y medios locales, trató "irrespetuosamente" a la delegación chilena presente. "Mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer", es la frase que, según consignaron fuentes allegadas a la Cancillería chilena, pronunció el diplomático en el encuentro celebrado en el paso Los Libertadores, más conocido como el Cristo Redentor.

"En dependencias del complejo Los Libertadores y ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles del SAG y el perfil alimentario de nuestro país, Sr. Faurie alzó la voz manifestando que 'no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer', señalaron fuentes de cancillería.

En tanto, el secretario general de Política Exterior de la Cancillería, el embajador Rodrigo Olsen, se reunió con el embajador argentino (en un encuentro programado con anticipación) y le hizo notar la preocupación por sus supuestos dichos por los que, según destacaron, luego pidió disculpas en privado.

Links sugeridos

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942002003500009

<https://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0037443.pdf>

<https://www.difrol.cl/download/acta-del-segundo-encuentro-de-la-comision-binacional-de-seguimiento-de-los-compromisos-asumidos-en-materia-de-facilitacion-fronteriza-e-infraestructura-de-pasos-entre-argentina-y-chile/>

<https://elpais.com/argentina/2024-04-05/milei-anuncia-una-base-naval-conjunta-con-estados-unidos-en-la-patagonia-argentina.html#>

<https://www.diarioprensa.com.ar/chile-en-alerta-por-la-base-naval-integrada-de-ushuaia/>

Movimientos geopolíticos en la Patagonia: Argentina, China y Estados Unidos

Reporte No. 86
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Abril 2024

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace unas semanas llegó a la ciudad patagónica de Ushuaia donde se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, delegada militar del Gobierno de Joe Biden para América del Sur, quien visitaba una base naval en la zona. Durante la ocasión Milei afirmó que “Occidente corre riesgo” y que los argentinos tienen “una afinidad natural” con Estados Unidos, con quienes comparten “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, para después anunciar la construcción de una base naval conjunta en la zona: “un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”, detalló.

El hecho de abrir el juego a los militares estadounidense al territorio antártico y, por ende, a las Islas Malvinas, despertó enojos en algunos sectores que lo consideran como una violación a la soberanía nacional y especulan con que, en ese intercambio de favores, el gobierno podría tomar alguna definición respecto a la base espacial china.

Al respecto, China ya no oculta la tensión con el gobierno de Javier Milei, cosa que quedó clara con los tuits de la embajada China en Buenos Aires, para defender la base espacial de Neuquén que está en la mira de los Estados Unidos por supuestas actividades militares y de inteligencia que encuadran en su disputa geopolítica.

Richardson, una voz activa sobre la preocupación estadounidense por la influencia de China en América del Sur, llegó a Ushuaia para ver el trabajo de las autoridades navales que controlan las rutas marítimas comerciales en el Atlántico Sur tras días en los que tanto la embajada estadounidense como el Gobierno argentino agitaron sus dudas sobre la presencia china en la Patagonia. El lunes, durante una entrevista con el diario La Nación, el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, afirmó que las Fuerzas Armadas chinas operaban en secreto en la zona sin aportar pruebas. “Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”, dijo. Por acuerdos firmados entre 2012 y 2014, China mantiene una base de observación espacial de 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, en la que no tiene permitido hacer investigaciones militares. El ministro de Interior, Guillermo Francos, quiso enterrar la polémica y afirmó que eran “observaciones particulares” del embajador, pero el Gobierno afirmó después que buscará realizar “inspecciones técnicas” en la base espacial china en Neuquén.

Milei no nombró a China, pero en su discurso del jueves afirmó que “muchos gobiernos de la Argentina se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella”. “No han hecho nada por defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del ingreso del narcotráfico. No han hecho nada por investigar el terrorismo islámico que lamentablemente hemos sufrido. Y no han hecho nada por defender la integridad territorial de nuestro Mar Argentino, que año tras año ha sido invadido por pesqueros ilegales y drenando sus recursos ictícolas”, dijo el presidente. La presencia de buques pesqueros extranjeros, muchos de ellos con bandera china, que trabajan en el límite de la frontera marítima argentina en el Atlántico Sur, es un problema que desde hace años vigilan las Fuerzas Armadas.

China, por su parte destacó que "la Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina, a la que científicos de ambos países tienen acceso". El texto remarcó que "además de ofrecer servicio de medición y control para proyecto aeroespacial de China, gracias a la coordinación de CONAE, esta estación también trabaja junto con los organismos y empresas de varios países en la exploración espacial". "El gobierno local y escuelas de Neuquén utilizan esta estación para la divulgación de conocimientos espaciales. En 2019, la cancillería argentina y CONAE coordinaron una visita de delegación de representantes diplomáticos, incluyendo de Estados Unidos, a la estación", agregó.

Por último, sostuvo: "El documental hecho por la parte argentina en 2019 sobre la estación de espacio lejano chino-argentina ha tenido muy buena acogida. Todo esto demuestra plenamente el carácter civil y el modelo de operación abierto y transparente de dicha estación".

La misteriosa historia de la base en Neuquén

La base china instalada en Neuquén es una historia rodeada de misterio desde el inicio cuando "los chinos", como se los llama a secas en Las Lajas, desembarcaron sin previo aviso a mediados del 2014. Una decena de ellos contrató mucha mano de obra zonal muy bien pagada (unos 270 trabajadores argentinos afectados a la obra civil y unos 30 profesionales y técnicos llegados desde China). En el 2017, cuando terminaron de construir un complejo que cuenta con cocina, dormitorios, un gimnasio y el radar, que se supone que es para avanzar en la exploración de la Luna, en un paraje desértico al lado de la ruta 31, el personal chino se trasladó a habitarlo con el mismo sigilo con el que llegó.

El gobierno de Neuquén le cedió 200 hectáreas a China por un lapso de cincuenta años. Nadie puede entrar a la base -que técnicamente es territorio tan chino como Pekín-, nadie sabe realmente qué pasa ahí, nadie confía en que la imponente antena de 35 metros se use solamente para fines civiles, nadie habla con los seis chinos que, se supone, viven ahí durante seis meses hasta que los reemplaza otro contingente, y la lista de misterios podría seguir.

El cartel que identificaba la base como: "Estación de Espacio Lejano, CLTC-CONAE-NEUQUÉN" (China Satellite Launch and Tracking Control General -una división de las FFAA chinas- y Comisión Nacional de Actividades Espaciales) ha desaparecido y la desinformación hace crecer los mitos entre los vecinos de Las Lajas. No se ven uniformados ni gente armada, apenas personal de maestranza que abre los portones enrejados a cualquier visitante autorizado, por ejemplo, los científicos de la CONAE que concurren periódicamente a la base, aunque con menor frecuencia que la que el convenio les habilita.

Siguiendo el vocabulario científico, habría que llamarla "estación de observación del espacio profundo". Su equipamiento (y localización geográfica particular) ya permitió observar el lado oscuro de la Luna, entre otros hallazgos astronómicos posibles. Pero como la base depende del Ministerio de Defensa chino, lógicamente se la etiqueta vulgarmente como "base militar".

Al respecto, los técnicos argentinos reconocen que, al menos en teoría, la base podría ser de uso dual, es decir, de observación astronómica y, a la vez, de seguimiento estratégico de satélites con fines militares, esto último específicamente prohibido por una adenda al convenio que hizo la entonces canciller Susana Malcorra, durante el gobierno de Mauricio Macri, explicitando una restricción que ya se daba por entendida desde la firma del acuerdo con China, en tiempos de Cristina Kirchner.

La ex diputada provincial Beatriz Kreitman lo describe así: “En un país donde existen leyes de Acceso a la Información nos encontramos con una base que no sabemos qué actividad realiza. Además, se habían comprometido a cederle a la provincia para que pudieran utilizarlo y eso nunca se ha cumplido”. Y concluye: “Me parece que es muy grave. Es grave la cesión de la tierra, la entrega de soberanía, que ni siquiera se les haya cobrado un solo impuesto y sobre todo que desconocemos absolutamente lo que pasa en la base. Hay muchas irregularidades”.

Para China la base satelital es muy importante. Es la única que está emplazada fuera de su país, y es clave para su ambicioso proyecto de llevar al primer humano al lado oscuro de la Luna en el 2040. La Estación ofrece un servicio de soporte a las misiones que lanza el Programa Chino de Exploración Lunar y el Programa Chino de Exploración del Sistema Solar. Desde que se instaló en Neuquén colaboró con el seguimiento de un vehículo espacial que llegó a Marte, otro que llegó a la Luna y de un satélite que se puso en órbita como antesala al desembarco en el lado oscuro.

Tan importante es para China que, como muestra de agradecimiento hacia Argentina -que no cobró un solo dólar por ceder el terreno-, llevaron por primera vez la bandera celeste y blanca al espacio exterior.

Situación geopolítica

La situación de la base china en Argentina es parte la disputa geopolítica global de EEUU y sus aliados contra la supuesta pretensión expansionista del gigante asiático. Una pretensión que se extiende en varios lugares, en particular en África y Latinoamérica. En ese contexto es una espina en las relaciones entre Argentina y el gobierno estadounidense, pese a que se insista en que persigue sólo intereses científicos. Es un proyecto que comenzó con Cristina Fernández de Kirchner y continuó con Mauricio Macri y Alberto Fernández sin ningún tipo de sobresaltos. Hasta ahora nadie parecía querer pelearse con China. Pero llegó Milei, quien ha hecho declaraciones que van desde que no haría "negocios con ningún comunista", que el pueblo de China "no es libre", al tiempo que abomina de los BRICS (grupo que incluye a China).

Chile y sus reclamos

Otra arista de los movimientos desatados por estas acciones fue realización de recientes ejercicios militares del Batallón de Infantería de Marina N°4 en las costas del canal Beagle, lo que reavivó la preocupación de las autoridades chilenas sobre los planes de Argentina de crear una Base Naval conjunta con Estados Unidos, según reporta recientemente el diario local Prensa, de Ushuaia. Las acciones del gobierno argentino en torno a la incorporación de elementos armamentistas y la firma de acuerdos con Estados Unidos en relación a la Base Naval Integrada, actualmente en construcción en las costas de Ushuaia, la compra a Dinamarca de 24 aviones F-16 de combate para la Fuerza Aérea Argentina, al igual que el despliegue de marinos sobre el Canal Beagle – los del BIM Nro. 4 –, provocan comprensibles resquemores en Chile.

El diario local señala que la oposición chilena presiona al presidente Boric, quien tiene una visión universalista y ambientalista» y que “descuida los reclamos de soberanía en la Antártida y los mares del sur por carecer de entusiasmo nacionalista».

El legislador Tomás De Rementería (de PS), indicó por su parte que «Javier Milei debería leer un tratado antártico y saber que la Antártica no tiene que ver con nada militar. Acá hay un tratado que define principios, no hay una disputa, sino que hay pretensiones que están congeladas. Debería asesorarse mejor Milei porque no todo esto es una competencia brutal por quién gana mejores o peores posiciones, esto no es una pasada de gol; acá hay una situación, Chile tiene una presencia en

la Antártida y no marcada por el militarismo, sino por la investigación científica y la cooperación, que es realmente lo que define la presencia de cualquiera en la Antártica».

El diputado Jorge Brito (de Revolución Democrática), citado por el diario El Mercurio afirmó que “estamos viendo con preocupación que Estados Unidos, mediante el Comando Sur, ha iniciado una campaña agresiva para estimular la carrera armamentista en Sudamérica» y habló de la Base Naval Integrada en Ushuaia “que proyectan los argentinos”.

El diputado Raúl Soto (del PPD) dijo a su turno: “Espero que esta no sea la oportunidad en que eso se quiebre, se rompa, a propósito de la imprudencia en materias internacionales del presidente Milei, que está demostrando una inexperiencia importante que puede llevarlo a cometer graves errores para su país y también para países vecinos como es Chile». Soto pidió también que a través de Antonio Viera Gallo, el embajador de Chile en Argentina se puedan establecer los canales diplomáticos “para que esta situación no siga escalando y no termine **tensionando** (sic) las relaciones entre países que son vecinos y hermanos».

Venezuela y Chile, el entramado de tensiones

Reporte No. 87

Solicita: Jaime Quintana, Senador.

Asesora externa: Carolina Frêne

Abril 2024

En estas últimas semanas, el gobierno de Gabriel Boric ha endurecido su tono frente a la administración de Nicolás Maduro y decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, en el marco del complejo momento entre Chile y Venezuela, que se arrastra desde hace varios años.

El detonante final lo activó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, quien recientemente negó la existencia de la organización criminal Tren de Aragua. “Hemos visto cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice 'somos del Tren de Aragua', con acento peruano, con acento chileno”, señaló Gil en una rueda de prensa, donde agregó que es “una ficción mediática internacional”. Dichas declaraciones fueron expresadas la misma semana en que la Fiscalía chilena apuntó a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente opositor a Maduro y refugiado político en Chile desde 2018, tuvo un móvil político y fue orquestado desde Venezuela.

Ante esto, el presidente Gabriel Boric expresó a través de su cuenta de X (Twitter) que “las afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización” (...) “Además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable”, agregó.

La ministra de Interior, cartera en la que recae la seguridad pública en Chile, Carolina Tohá, catalogó los dichos del canciller como “un insulto a los pueblos de Latinoamérica” (...) “Es bien impresionante. Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos, han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”.

Ronald Ojeda

El secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda, un opositor al gobierno de Maduro que residía en Chile como refugiado político desde 2018, vino a complejizar la situación. Ojeda fue secuestrado en Santiago el 21 de febrero y su cadáver fue hallado 10 días después dentro de una maleta enterrada bajo el cemento. El oficial no era una persona de alto perfil, pero cobró notoriedad luego de que el gobierno venezolano le impusiera cargos por traición a la patria en 2017.

El 11 de abril desde la Fiscalía chilena se sostuvo que “esto se organizó (y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda) desde Venezuela”, según declaraciones del fiscal Héctor Barros, quien indicó que se le envió un “requerimiento de asistencia penal internacional a

Venezuela, a efecto que nos puedan ayudar con la detención de los dos ciudadanos venezolanos que están en dicho país”.

Ante esto, la ministra Tohá afirmó que “este crimen es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos del mundo van a estar puestos sobre su comportamiento y la disposición a colaborar en esta investigación tiene que demostrarse en hechos”. Cabe destacar que ambos países tienen un tratado vigente de extradición, desde el año 1962.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en un mensaje en X que habían recibido una solicitud oficial de información por parte de las autoridades chilenas sobre cinco personas "vinculadas al homicidio" de Ojeda y aseguró que la petición "será respondida a la brevedad". No obstante, destacó que esta no era una solicitud de asistencia mutua en materia penal realizada utilizando los mecanismos diplomáticos correspondientes.

Otra situación que complicó las cosas fue el asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez durante un intento de robo en Santiago el pasado 10 de abril, donde de las cuatro personas implicadas en el crimen, tres son de nacionalidad venezolana. Esta situación exacerbó las tensiones entre ambos países, con Chile criticando una vez más la débil colaboración del Gobierno venezolano en la deportación de ciudadanos venezolanos involucrados en actividades criminales en Chile.

Las declaraciones de Maduro

“¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes?”, sostuvo Maduro la noche del lunes, apuntando al mismo tiempo al expresidente Sebastián Piñera, y echando más bencina a la hoguera. Boric no tardó en referirse al asunto, asegurando que “las diferencias entre chilenos las resolvemos acá, en Chile. No por la prensa, hablando con mandatarios extranjeros”. Maduro invitó a Boric a conversar personalmente sobre los asuntos que les atañen y no por la prensa, a lo que el mandatario chileno aseguró estar disponible, pero que, más allá de la retórica, espera “colaboración concreta”.

Llamado a consulta

Ante la complicada situación, el presidente Boric llamo a consulta a Jaime Gazmuri, quien ocupa el cargo de embajador desde mayo del año pasado, luego que la representación diplomática estuviera vacante por 5 años. Boric dijo que el objetivo de esto es “recabar información detallada sobre la situación actual en el país (Venezuela) e instruirlo (al embajador Gazmuri) a tomar todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano, como también ante organismos internacionales”.

Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y doctora en Relaciones Internacionales, explica que el llamado a consultas al embajador es una señal de la tensión que se viene acumulando entre ambos países, impresión compartida por los ministros de Boric quienes también elevaron duros cuestionamientos hacia la administración de Maduro.

Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señaló a France 24 que “la estrategia diplomática chilena es adecuada, la llamada a consulta al

embajador es una señal bastante clara y evidente de que espera un cambio en la señales dadas por Venezuela”.

Además, indica que la medida tomada por Boric tiene dos objetivos: por un lado, “la necesidad de actuar en colaboración respecto a la inmigración irregular y por los actos delictivos cometidos por venezolanos en Chile”. En segundo lugar, Milet señala que el Gobierno chileno tiene la intención de “expresar a Maduro la necesidad de actuar colaborativamente respecto al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda”.

Venezuela no colabora

De un tiempo a esta parte, Chile viene acusando a Venezuela de no colaborar con la seguridad en la región latinoamericana. Para muestra del contexto: el asesinato de un policía chileno, el teniente Emmanuel Sánchez Soto, que consternó al país. El crimen ocurrió el miércoles (10 de abril) en la noche, en la zona poniente de la ciudad de Santiago. Uno de los atacantes -que fue abatido en el lugar- era de origen venezolano y tenía orden de expulsión desde 2020, según la información entregada por el subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.

Ello sirve de ejemplo para comprobar que muchas de las órdenes de expulsión no se han podido concretar debido a la “débil” colaboración de Caracas, ya que “para poder cruzar a ciudadanos venezolanos a Venezuela, se requiere necesariamente la coordinación con el gobierno venezolano, si no, no es posible”, indicó Monsalve, insistiendo en que Maduro debe autorizar el ingreso de aviones a su espacio aéreo, por una parte, y también ayudar a corroborar las identidades de las personas expulsadas.

Boric también se refirió a este tema, expresando que “Venezuela no está colaborando con los países del sur, porque sí lo hace con Estados Unidos, sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación”, dijo a la prensa.

Para muestra un botón

En noviembre de 2023, el Gobierno de Gabriel Boric tenía previsto expulsar a 60 inmigrantes venezolanos que habían entrado de forma ilegal o que habían cometido un delito en Chile. El vuelo en una aerolínea comercial, que estaba dedicado especialmente a la repatriación, estaba programado para despegar un viernes. La Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del operativo, entregó los nombres al consulado venezolano en Santiago, como indica el procedimiento y cuando estaban ultimando los detalles del viaje, la Administración de Boric informó que el vuelo “no fue autorizado”, por lo que se harían gestiones diplomáticas al más alto nivel para destrabar la operación. El Ejecutivo después aseguró que fue el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela el que no otorgó el permiso requerido para ingresar a su espacio aéreo, quitándole la responsabilidad al régimen de Maduro.

Según informó la agencia AP, Chile tiene una larga lista de personas de nacionalidad venezolana con órdenes de expulsión que no se puede materializar en muchos casos por la falta de colaboración de Venezuela para recibir a los expulsados.

Desde el gobierno de Maduro, sin embargo, se ha dicho que el presidente venezolano ha solicitado ampliar “todas las coordinaciones y esquemas para así enfrentar al crimen organizado y defender a los pueblos de Venezuela y Chile”. Esto lo afirmó el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, durante la firma de un convenio entre ambos países en enero de este año que, según el gobierno de Maduro, permitiría “trazar estrategias para combatir la delincuencia organizada en el ámbito transnacional.

En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro, expresó su disposición a aliviar las tensiones con Chile. “Conversemos y busquemos las vías para combatir a los grupos criminales”, dijo el lunes 15 de abril en su programa semanal emitido por radio y televisión. “La realidad es la realidad, es lo que quisiera hablar directamente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía con el presidente Boric”, agregó el mandatario venezolano e indicó que “con respeto, con diálogo, con comunicación son muchas cosas que se pueden lograr”.

Tensiones de larga data

La tensión entre ambos países no es algo nuevo. La situación actual en materia diplomática entre Chile y Venezuela es difícil y viene desde hace bastante tiempo”. “No ocurrió solo en el Gobierno del presidente Gabriel Boric, también hubo un impasse diplomático importante con el expresidente Sebastián Piñera”, recuerda Paulina Astroza, Abogada egresada de la Universidad de Concepción, Chile. Diplomada en Relaciones Internacionales y Política Comparada.

Astroza señala que también se generaron tensiones con la expresidenta Michelle Bachelet, cuando cumplía su mandato como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde “emitió un informe bastante lapidario sobre el cumplimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos, la separación de funciones en Venezuela”.

Tren de Aragua

El origen y las operaciones del Tren de Aragua han sido objeto de debate y controversia tanto en Chile como en Venezuela. Mientras las autoridades chilenas sostienen que se trata de una organización criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos, el Gobierno venezolano ha negado su presencia en territorio chileno y ha acusado a Chile de utilizar este argumento como pretexto para justificar medidas represivas y acciones hostiles contra Venezuela.

Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, señala que “hay muchas personas que llegan a Chile en busca de oportunidades, que son la gran mayoría, pero también ingresan personas que pertenecen al crimen organizado transnacional”.

La experta indica que estas organizaciones ilegales instalaron una nueva forma de cometer delitos en el país. “En Chile estamos viviendo una mutación del fenómeno criminal. Hoy día hay muchos delitos que antes nosotros ni siquiera conocíamos, como lo es el sicariato”, indica la experta.

A su vez, la presencia del Tren de Aragua en Chile ha avivado el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad del Gobierno de Boric y ha suscitado interrogantes sobre la capacidad del país para hacer frente a amenazas transnacionales.

En una declaración ante la prensa, el pasado 30 de enero, el presidente Boric reconoció públicamente el creciente incremento en los índices de delincuencia. Ante esta situación, el mandatario resaltó la importancia de implementar medidas de seguridad en colaboración con el Ministerio del Interior, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas.

Elecciones a medida y Chile en el medio

En lo inmediato, el régimen de Nicolás Maduro avanza en 2024 hacia unas nuevas elecciones hechas a su medida, avaladas por el control absoluto de todas las instituciones del Estado, partiendo por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, escenario que hace improbable que se pueda desarrollar una elección presidencial competitiva; como lo señalamos en el informe anterior.

En Chile este escenario tiene consecuencias muy complejas. Aunque Boric ha sido clarísimo en su rechazo al modelo de Maduro, condenándolo de forma explícita, es evidente que, al mismo tiempo, la crisis de seguridad y de migración obligan a la Cancillería a reforzar sus relaciones con Caracas, puesto que cualquier política migratoria viable exige un diálogo fluido entre los dos gobiernos.

Según Alvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) para los partidos de gobierno el problema venezolano es un laberinto sin fin. “En el caso del Partido Comunista, el desafío es articular su lealtad indiscutible con Cuba, aliada estratégica de Venezuela, y marcar un distanciamiento con un régimen que ya no cuenta con el apoyo del Partido Comunista venezolano, que ha pasado a la confrontación abierta contra él.

En el Frente Amplio y el Partido Socialista existe una aparente mayor libertad para asumir la postura del presidente. Pero en la práctica las tensiones pasan por la dificultad de articular una política migratoria que, sin criminalizar al conjunto de la población venezolana, asuma que existen redes criminales como el Tren de Aragua y otras estructuras similares que se arraigan predominantemente en delincuentes de esta nacionalidad. En tiempos donde la comunicación política es cada vez más simplificadora, hacer una distinción entre la enorme mayoría de la población venezolana y estas redes mafiosas es difícil. La ultraderecha estigmatiza y pide expulsiones masivas, y cualquier guiño a los derechos humanos de los migrantes es acusado de connivencia y complicidad con el régimen venezolano.

Para Chile Vamos la situación tampoco es simple. Al Gobierno de Sebastián Piñera se le acusa de haber facilitado deliberadamente la ola migratoria venezolana a partir del plan de Cúcuta, que más que un simple viaje fue el aval político y financiero al fallido intento de derrocamiento de Maduro por la vía insurreccional. En ese marco, lo que se instaló fue un “efecto llamada”, que contó con un relajamiento selectivo de los criterios migratorios para los nacionales de Venezuela. Ese cuestionamiento le resta al piñerismo parte importante de su ascendiente político en el debate.

Para la derecha radical, en especial para el Partido Republicano, su posición electoral entra en conflicto con su postura ideológica, ya que busca atraer el voto de la población venezolana residente, en teoría orientada hacia ideas de derecha, pero a la vez desarrolla propuestas políticas claramente xenófobas y abiertamente contrarias a los derechos de los migrantes, lo que le aleja de esa misma audiencia potencial”, puntualiza Ramis.

<https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/venezuela-un-problema-regional-e-internacional/>

Hezbollah, silenciosa presencia en las fronteras

Reporte No. 88
Solicita: Jaime Quintana, Senador.
Asesora externa: Carolina Frêne
Abril 2024

“Argentina está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas a Irán (...) que son Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina (y que) también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile”. Las declaraciones, que generaron disculpas públicas desde el país vecino, las hizo Patricia Bullrich el 17 de abril a un canal de televisión.

Al día siguiente la Embajada de Chile en Argentina informó que la ministra había aclarado que “dichas observaciones fueron realizadas en el contexto de un análisis de la situación regional, dentro del marco de las responsabilidades inherentes a su cargo, y no con la intención de generar miedo o alarma en Chile”.

Unas semana más tarde y en el marco de su asistencia como expositora invitada al encuentro anual de la Enade, Bullrich se reunió con Carolina Tohá y le entregó un informe confidencial sobre Hezbollah. Tohá, por su parte, volvió a descartar que la organización tenga presencia en Chile, señalando respecto de dicho informe que, si bien los antecedentes ya eran conocidos por el gobierno de Boric, “son temas que siempre hay que estar monitoreando y ser preventivos en eso”.

El contenido del texto

El documento no duda en señalar que hay “indicios” de que “tanto Irán” por su “injerencia político comercial” como el grupo Hezbollah, a través de “actividades ilícitas” “han aumentado su capacidad de acción en distintos puntos estratégicos de Latinoamérica” y cita casos puntuales relevantes en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Colombia.

También se da cuenta de la presencia del clan Barakat en la región y que, según se informa, uno de ellos, Hatem Ahmad Barakat fue designado por Estados Unidos, presunto financista de Hezbollah, vinculado con el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El documento no duda entonces en contar que Barakat “viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbollah, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile”. Y que su hijo, Ali Hatem Barakat residiría legalmente en el país trasandino con el número de RUT 22735459-3 (documento) pese a registrársele en Fox do Iguaçu.

Afirma que la hermana de Hatem Ali, Maysaa, viviría también en Iquique. Y que en Chile, Ali “fue dueño de dos negocios: Importadora Dakotas Limitada e Importadora y Exportadora Montreal

Limitada hasta junio de 2015 cuando liquidó ambos”. Y dice que durante su mandato en ambas empresas, su copropietario era un hombre llamado Ahmad Droubi. “A través de Droubi, se pudo identificar otra red de contactos simpatizantes con Hezbollah, del clan Rachid, que residirían en Santiago y Arica”.

Se afirma que estos grupos se han instalado sobre todo en Iquique, a través empresas de importación y exportación, “que servirían como organizaciones fachadas o empresas fantasmas”, como Saleh Trading Ltd. O también a través de Barakat Import Export Ltda -según el informe de Bullrich a Tohá- de donde “habrían desarrollado operaciones de blanqueo de capitales para financiar al grupo extremista”.

Según el informe, también hay sospechas en torno a las presuntas redes de Hezbollah en Chile con un avión de la iraní Maham Air, operado por la empresa venezolana Conviasa, que hizo al menos cinco vuelos entre Caracas y Santiago. Maham Air, que es la misma compañía del Boeing decomisado en Argentina a Emtrasur Cargo y enviado a Estados Unidos desde Ezeiza, en febrero pasado, está sancionada por los EE.UU. Allí la acusan de transportar armas, personal, recursos y equipos de organizaciones terroristas como Hezbollah y Fuerzas Quds. En esa aeronave, la que operaba con Chile, el presidente Nicolás Maduro realizó el viaje a Teherán en 2022.

El informe al que tuvieron acceso varios medios de comunicación, tiene 14 páginas y ahonda en otros temas de preocupación. Por ejemplo habla del acuerdo de Julio 2023 entre los ministros de Defensa de la República Islámica de Irán y Bolivia (Brigadier General Mohammad-Reza Gharaei Ahistiani y Edmundo Novillo, respectivamente).

El primero se comprometió a vender “tecnología avanzada” para “control fronterizo” y “combate al tráfico de drogas”. Todo ello en las frontera de Chile y Argentina, la única que manifestó preocupación por el asunto. El acuerdo contempla construcción y provisión de drones de reconocimiento para controlar la geografía fronteriza boliviana; barcos patrulleros para control del narcotráfico y el contrabando en lagos y ríos. Prevé un sistema de protección para evitar la penetración o hackeo de información e intercambios académicos en la temática de seguridad y defensa.

En lo que respecta a la actividad del grupo Hezbollah vinculada al terrorismo el informe ha identificado los siguientes casos, se dan los siguientes nombres y paraderos:

Eduardo Rubén Assad, alias Sheik Suhail Assad, en Chile. Lo señalan como argentino, nacido en 1975 y como “discípulo de Mohsen Rabbani”, uno de los iraníes acusados como responsables del ataque a la AMIA y con alerta roja de Interpol. Assad está registrado en la base de datos GEMS del Terrorist Screening Center del FBI.

En Santiago, Assad habría estado relacionado con el Centro Islámico de Chile, en Las Condes, desde principios de los 2000, hasta mediados de la década pasada.

Para los informes argentinos estaría “íntimamente vinculado a los servicios de inteligencia de Teherán y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica”. Y en realidad “viviría en Irán y el Líbano” y diferentes fuentes lo apuntan como “el organizador de una red de apoyo y reclutamiento por cuenta de Hezbollah en América Latina”.

Assad tiene al menos 9 entradas al país transandino desde Argentina desde 2006 hasta 2020.

¿Qué es Hezbollah?

Hezbollah es una organización musulmana chiíta libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Es, junto con el Movimiento Amal, la principal expresión política y militar de la comunidad chiíta del Líbano, actualmente el grupo religioso más numeroso del país. Fue fundado en 1982 en respuesta a la invasión israelí del Líbano, teniendo como objetivo original la luchar contra la ocupación israelí. Sin embargo, con el tiempo ha ampliado su agenda para incluir la lucha por los derechos de los chiítas libaneses y la oposición a la influencia estadounidense en la región.

El brazo político de Hezbollah está representado por el Movimiento de Resistencia Islámica, que participa en el gobierno libanés. El brazo paramilitar de Hezbollah, conocido como las Fuerzas de Resistencia, es una fuerza militar poderosa que ha participado en varios conflictos, incluyendo la guerra civil del Líbano (1975-1990), la guerra del Líbano de 2006 y la guerra civil siria.

Es considerado un grupo terrorista por varios países, incluyendo Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Sin embargo, Hezbollah es también una organización popular en el Líbano, donde goza de un amplio apoyo de la comunidad chiíta.

Hezbollah actúa como un brazo de Irán en la región, respondiendo a sus órdenes y sirviendo a sus intereses geopolíticos, especialmente en la lucha contra Israel. Esta relación simbiótica entre ambos es vista con gran preocupación por la comunidad internacional.

Los miembros de la agrupación han sido formados, armados, entrenados y asesorados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), específicamente por la Fuerza Al Quds, debiendo subordinación ideológica y política al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, y no al gobierno libanés. Actúa como organización clave en el enfrentamiento actual entre Israel y el régimen iraní, sirviendo como su principal herramienta para desafiar a Israel y Occidente.

Su estrecha relación con Irán y su arsenal de misiles guiados de precisión lo convierten en un actor peligroso que podría desencadenar un conflicto regional más amplio. Sobre todo en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas, Hezbollah podría involucrarse y abrir un tercer frente en los Altos del Golán, lo que impulsaría al Medio Oriente a un territorio inexplorado de consecuencias impredecibles.

Hezbollah ha sido acusado por Argentina de participar en el atentado contra la AMIA en 1994, que dejó decenas de muertos, junto con Irán. La justicia argentina ratificó recientemente la responsabilidad de Irán en este ataque terrorista.

La presencia de Hezbollah en América Latina se remonta a los años ochenta, cuando la agrupación comenzó a enviar activistas a la región conocida como la triple frontera —entre Brasil, Argentina y Paraguay— tristemente célebre por la anarquía reinante en ella, y a utilizarla como refugio principal para recaudar fondos, lavar dinero, reclutar y capacitar miembros, planear atentados y realizar otras tareas relacionadas con el terrorismo. Entre sus actividades están también el tráfico de drogas y armas, la falsificación de dinero y documentos de viaje, y la piratería de software y música. El proselitismo resultante derivó en la creación de numerosas células del

Hezbollah, se estima que con 460 miembros, en la triple frontera para mediados de la década de 2000.

Si bien no es posible cuantificar el nivel de actividad delictiva que tiene lugar en la triple frontera, algunos estiman que los grupos extremistas islámicos que se encuentran allí y en otras zonas sospechosas de América Latina envían entre US\$300 y US\$500 millones al año provenientes de ganancias ilícitas a los grupos extremistas islámicos de Oriente Medio.

Links sugeridos

<https://www.pucara.org/post/hezbollah-ya-leg%C3%B3-a-am%C3%A9rica-latina>

<https://www.jstor.org/stable/resrep03113?seq=8>

<https://cimar.org.es/ponencia/la-evolucion-de-hezbollah-desde-su-origen-como-movimiento-de-resistencia-hasta-su-incrustacion-como-una-elite-mas-del-sistema-politico-libanes/>